

LTDO : EMILI PANZUELA MONTERO 937397098
CLIENTE : AJUNTAMENT DE TERRASSA
NOTIFICADO : 31/07/2018

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA
SALA DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
SECCIÓ 3^a

Recurs d'apel·lació núm. 73/2017

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona

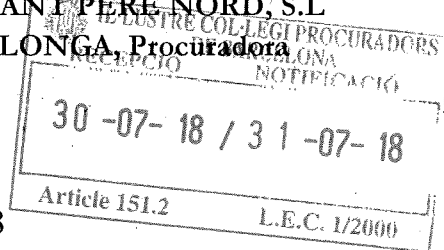
Procediment ordinari núm. 221/2015

Apel·lant: IL·LM. AJUNTAMENT DE TERRASSA

Representant de l'apel·lant: SRA. CRISTINA CORNET SALAMERO, Procuradora

Apel·lats: SR. GUILLERMO BOSCH DE BASEA CUSCÓ i SANT PERE NORD, S.L

Representant dels apel·lats: SRA. ELENA SORIA DE VILLALONGA, Procuradora



SENTÈNCIA núm. 704/18

Magistrats/ades:

IL·LM. SR. MANUEL TÁBOAS BENTANACHS, President

IL·LMA. SRA. ISABEL HERNÁNDEZ PASCUAL

IL·LM. SR. HÉCTOR GARCÍA MORAGO

Barcelona, 19 de juliol de 2018

LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA (SECCIÓ 3^a), en nom de S.M el Rei i de conformitat amb allò que disposa l'art 117.1 de la Constitució, ha pronunciat la SENTÈNCIA que segueix, a les actuacions del recurs d'apel·lació núm. 73/2017, promogut per IL·LM. AJUNTAMENT DE TERRASSA – representat per la Procuradora SRA. CRISTINA CORNET SALAMERO i

assistit pel Lletrat SR. EMILI PANZUELA MONTERO-, essent els apel·lats el SR. GUILLERMO BOSCH DE BASEA CUSCÓ i SANT PERE NORD, S.L – representats per la Procuradora SRA. ELENA SORIA DE VILLALONGA i assistits per la Lletrada SRA. ISABEL MONFORTE OTTERBACH-.

Ha actuat com a Magistrat ponent l'Il·lm. Sr. Héctor García Morago, el qual expressa el parer de la Sala.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER: En el sí del procediment ordinari núm. 221/2015, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona dictà la Sentència núm. 282, de 12 de desembre de 2016, amb el veredicte que segueix:

“ESTIMO PARCIALMENTE el recurso presentado por D. Guillermo Bosch de Baesa Cusco y la entidad Sant Pere Nord S.L. contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de marzo de 2015 que aprueba la sustitución de la modalidad ejecución del sistema de actuación de reparcelación por el de compensación en el PMU Sector PM-SEU095, Avinguda de Sta Eulalia. Y ANULO PARCIALMENTE la resolución impugnada.

DECLARO que el colector que atraviesa el ámbito es un sistema general y su encauzamiento debe ser financiado por la administración y no por los propietarios del Sector

Sin hacer expresa imposición de costas.”

SEGON: Disconforme amb la decisió que hem transcrit, l'Ajuntament demandat deduí apel·lació en temps i forma, a la qual s'hi oposaren els actors i ara apel·lats.

TERCER: Un cop elevades les actuacions a aquesta Sala, es va acordar formar-ne aquest rotlle d'apel·lació i, un cop verificats els tràmits processals pertinents s'assenyalà el dia 18 de juliol de 2018 per tal de votar i decidir, la qual cosa es verificà en aquests mateixos termes.

QUART: En la tramitació d'aquest recurs d'apel·lació han estat observades les prescripcions legals de rigor.

FONAMENTS DE DRET

PRIMER: Tal com ja hem expressat, en el sí del procediment ordinari núm. 221/2015, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona dictà la Sentència núm. 282, de 12 de desembre de 2016, amb el veredictes que segueix:

“ESTIMO PARCIALMENTE el recurso presentado por D. Guillermo Bosch de Baesa Cusco y la entidad Sant Pere Nord S.L. contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de marzo de 2015 que aprueba la sustitución de la modalidad ejecución del sistema de actuación de reparcelación por el de compensación en el PMU Sector PM-SEU095, Avinguda de Sta Eulalia. Y ANULO PARCIALMENTE la resolución impugnada.

DECLARO que el colector que atraviesa el ámbito es un sistema general y su encauzamiento debe ser financiado por la administración y no por los propietarios del Sector

Sin hacer expresa imposición de costas.”

El veredictes que hem transcrit va venir precedit de les consideracions que segueixen:

“SEXTO.- Objeto del recurso.-

El presente recurso contencioso administrativo tiene por objeto la pretensión anulatoria ejercitada a nombre de D. Guillermo Bosch de Baesa Cusco y la entidad Sant Pere Nord S.L. contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 22 de marzo de 2015 que aprueba la sustitución de la modalidad ejecución del sistema de actuación de reparcelación por el de compensación en el PMU Sector PM-SEU095, Avinguda de Sta Eulalia.

SEPTIMO.- Pretensiones y alegaciones de las partes.

La parte actora expone en primer lugar expone unos antecedentes históricos y administrativos a los que me remito. Alega que la canalización del colector es un sistema de carácter general al servicio de toda la población y debe ser sufragado mediante impuestos y representa más de un 23% del presupuesto total de ejecución. Sigue alegando que existe desequilibrio entre beneficios y cargas de la actuación y que el cambio de sistema es extemporáneo por precipitado. Como fundamentos de derecho expone que es el cambio de sistema de reparcelación básica a cooperación carece de requisitos justificativos. Infracción del principio de justicia distributiva. El colector que atravesaba ámbito del sistema general cuya condición debe ser satisfecha mediante impuestos y no a cargo de los propietarios y puede acudir al sistema de ocupación directa. Por todo ello súplica que dicte sentencia por la que se declare no ajustada a derecho el acto administrativo impugnado

La administración demandada se opone a la demanda y alega en primer lugar unos antecedentes a los que me remito y como fundamentos de derecho alega la corrección del cambio de sistema; niega la infracción del principio de justicia distributiva y expone que el colector forma parte integrante de las obras de urbanización incluidas en el ámbito, por lo que corresponde su ejecución los propietarios. Por todo ello solicita que se desestime la demanda

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- Como resulta de lo expuesto anteriormente el recurso se articula sobre tres puntos básicos. El primero la inexistencia de requisitos que justifiquen el cambio de sistema de compensación básica a cooperación.

Según resulta del artículo 129.2 del Decreto 305/2006 la administración pueda acordar la sustitución de la modalidad de compensación básica al de cooperación en el supuesto que los propietarios incumplan sus obligaciones, entendiendo como tal la inactividad de los interesados.

La actora niega la inactividad. Según el plan de etapas se fijaba unos plazos para la presentación del proyecto de urbanización; para el inicio de las obras de urbanización por y para la construcción de las edificaciones. Ninguno de estos plazos se ha cumplido. La administración formuló requerimiento previo según resulta del acuerdo de 19 de enero de 2011.

A la vista de los antecedentes administrativos y alegaciones de las partes debemos coincidir con la administración demandada en el sentido de que existe incumplimiento de obligaciones inactividad por parte de los propietarios del sector:

El momento de efectuar el requerimiento, a más de grande retrasos en la aprobación de estatutos y bases de actuación, la Junta de Compensación no se había constituido y no se había presentado el texto refundido del proyecto de urbanización, ni tampoco el correspondiente proyecto de reparcelación. Además el Ayuntamiento acredita la necesidad de dar un impulso al sector por el estado de abandono urbanístico en el que se encuentran mismo y que ha supuesto la apertura de diversos expedientes de disciplina urbanística, más la complejidad de ejecución dada la estructura fragmentada de la propiedad del sector.

Con ello decae el primer motivo del recurso.

SEGUNDO.- El segundo motivo se fundamenta en la infracción del principio de justicia distributiva.

Frente a las alegaciones en este sentido que presenta la parte actora, hay que tener en cuenta que el cambio de la modalidad de ejecución de compensación a cooperación no altera los criterios económicos seguidos en la delimitación poligonal y en la formulación de los instrumentos de planeamiento y gestión, que se encuentran incorporados en los planes de mejora y proyecto de reparcelación elaborados por la propia Junta de Compensación y que son vigentes y aplicables en el nuevo sistema acordado por el Ayuntamiento.

En todo caso, estos parámetros económicos no puede entenderse que formen parte del acto administrativo objeto del recurso puesto que el mismo no los modifica y no consta que el actor los impugne en su momento. En todo caso son susceptibles de modificación mediante la modificación a su vez de los instrumentos urbanísticos a aplicar en el Sector.

TERCERO.- Y finalmente en relación con el colector, queda claro a la vista de la naturaleza del cauce y alegaciones de las partes que se trata de un sistema general. El dictamen pericial elaborado por el arquitecto don Ángel Antonio Rodríguez Rodríguez, insaculado por el Juzgado y por consiguiente dotado de las máximas garantías de independencia y fiabilidad en virtud de su forma de designa es claro y rotundo en el sentido de indicar que el colector recoge aguas residuales y pluviales de parte de la ciudad adyacente y las dirige al centro, por lo que no se puede discutir que se trata de un sistema general que afecta a toda la población. El perito indica que el coste de la red de saneamiento alcanza la cantidad de 363 498 € que representa de 23,50% del total presupuesto del proyecto de urbanización y que dobla la prevista en el plan de mejora urbana. También consta que otros tramos del mismo torrente han sido financiados con fondos FEDER .

Por consiguiente queda suficientemente claro que no resulta procedente que los propietarios asuman enteramente el coste de este sistema general que integra la estructura general básica de ordenación urbanística determinante de su desarrollo.

No es exactamente el mismo supuesto de la Sentencia de 24 de mayo de 2012 TSJC, pues aquélla se refería a una riera y este procedimiento un colector, que debe suponerse de menor entidad que la riera, pero a la vista de la funcionalidad del colector, que es la misma que la de la riera, las consideraciones de dicha Sentencia pueden ser de aplicación a este caso, y más a la vista del desproporcionado coste que implica el cubrimiento de tal elemento.

Por ello se deberá estimar este motivo del recurso.

CUARTO.- Tratándose de una estimación parcial, no procede imposición de costas.”

SEGON: L’Ajuntament de Terrassa ha sol·licitat la revocació de la Sentència *a quo*, així com la íntegra desestimació de la demanda articulada en primera instància; a la qual cosa s’hi han oposat les parts apel·lades, no sense criticar, alhora, el veredicta d’instància, en la part del mateix que no els hi hauria estat favorable.

Els termes del debat no han deixat de ser –en ambdós sentits– els de la primera instància; per bé que modulats en forma de crítica o de defensa de la Sentència dictada pel Jutjat *a quo*.

TERCER: En allò que afecta al canvi de modalitat del sistema de reparcel·lació (de compensació bàsica a cooperació), no podem per menys que rebutjar els al·legats del apel·lats; perquè no hi ha a les actuacions cap element susceptible de posar en entredit les dades recollides en sengles informes municipals de 28 d’octubre de 2014 i 4 de març de 2015 (folis 1 a 4 i 78 a 82 de l’expedient administratiu), els quals no farien sinó acreditar la necessitat de situar l’Ajuntament com a impulsor de l’expedient de reparcel·lació, en substitució d’una iniciativa privada dèbil o tardana. No sense afegir l’ampli marge de discrecionalitat del qual gaudeix l’Administració a l’hora de determinar les modalitats i sistemes d’actuació en seu de gestió urbanística [art. 121.3 del text refós de 2010 de la Llei d’urbanisme (TRLU)]; això últim, en funció de les necessitats, dels mitjans economicofinancers disponibles, del grau de col·laboració de la iniciativa privada, així com de la resta de circumstàncies concurrents en cada cas concret.

QUART: Quant a l’apel·lació deduïda per l’Ajuntament de Terrassa, avançar que la mateixa haurà de prosperar.

Te raó la Corporació municipal en assenyalar que un expedient que tenia per única finalitat la de substituir la modalitat del sistema de reparcel·lació, no podia donar cabuda a pretensions de matís econòmic directament relacionades amb les càrregues a suportar per la propietat.

Haurà de ser a resultes dels instruments adreçats a concretar, a fer efectiva o a liquidar la distribució equitativa de beneficis i càrregues quan els propietaris privats podran posar en entredit aquelles càrregues que considerin excessives o directament il·legals. I aquest també serà el moment en el qual l'Ajuntament podrà oposar l'existència d'actes hipotèticament consentits o les determinacions del planejament urbanístic aprovat, sens perjudici que aquest últim pugui ser impugnat de forma indirecta, expressament o tàcitament. Observacions, les precedents, que ens excusaran d'haver d'entrar en més consideracions.

CINQUÈ: Atès allò que disposa l'art. 139.2 LJCA, no serà precís efectuar cap pronunciament especial en matèria de costes.

DECISIÓ:

Per tot allò que ha estat exposat, aquesta Secció 3^a de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya **HA DECIDIT:**

ESTIMAR el present recurs d'apel·lació núm. 73/2017, promogut per L'IL·LM. AJUNTAMENT DE TERRASSA amb l'oposició del SR. GUILLERMO BOSCH DE BASEA CUSCÓ i de SANT PERE NORD, S.L i, conseqüentment, **REVOCAR** i deixar sense cap efecte la Sentència núm. 282, de 12 de desembre de 2016, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona en el sí del recurs contenciós administratiu ordinari núm. 221/2015. I en substitució de la susdita Sentència, **DESESTIMAR** íntegrament l'expressat recurs contenciós administratiu.

Sense imposició de costes.

Notifiqui's, i faci's saber a les parts que aquesta Sentència no és ferma.

Contra la mateixa només podrà interposar-se recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, el qual haurà de fonamentar-se el el dret estal o l'uropeu.

Aquest recurs haurà de preparar-se davant d'aquesta la nostra Sala i Secció en un termini màxim de trenta dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver estat rebuda la notificació corresponent, de conformitat amb l'art. 89 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), modificada per la Llei Orgànica 7/2015, de 21 de juliol.

La preparació del recurs de cassació haurà d'ajustar-se a les previsions de l'expressat art. 89 (punt 2). En qualsevol cas, els seus promotors hauran de tenir present l'Acord de 19 de maig de 2016, del Consell General del Poder Judicial, pel qual es fa públic l'Acord de 20 d'abril de 2016, de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, de fixació de regles sobre l'extensió màxima i altres condicions extrínseques dels escrits processals referits al Recurs de Cassació (BOE núm. 162, de 6 de juliol de 2016).

Aquesta és la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem. Un cop ferma, adjunteu-ne una certificació literal al rotlle d'apel·lació i lliureu-ne testimoni al Jutjat d'origen junt amb les actuacions rebudes als efectes de les diligències processals que siguin pertinents.

PUBLICACIÓ.- El dia d'avui i en audiència pública, el Magistrat ponent ha llegit i ha publicat la Sentència anterior. En dono fe.